

El Salvador: La Asamblea Legislativa no debe aprobar un proyecto de ley de "amnistía de facto" para las violaciones de derechos humanos, dicen expertos de la ONU

GINEBRA (16 de mayo de 2019) - El experto de derechos humanos de la ONU en justicia transicional insta a la Asamblea Legislativa de El Salvador a no aprobar un proyecto de ley que permita perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75.000 vidas entre 1980 y 1992.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa examina desde el 14 de mayo de 2019 un borrador de artículos para una nueva ley de reconciliación nacional. Las víctimas del conflicto armado, sus representantes y la sociedad civil en general no han sido consultadas en el proceso. Un proyecto de ley basado en este borrador de artículos podría ser aprobado en el plenario de la Asamblea antes de que finalice esta semana.

El proyecto tiene por objeto aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía establecida en 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa que emita una nueva Ley de Reconciliación Nacional.

Las disposiciones de dicho proyecto incluyen amnistías o perdones de facto, ya que las penas de prisión serán suspendidas y sustituidas por el servicio a la comunidad, y la responsabilidad penal se atribuirá únicamente por la omisión o acción directa en la realización de un acto punible, con el riesgo de que queden impunes quienes ordenaron, participaron o fueron cómplices de ello. También establece un plazo de prescripción de cinco años para la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones cometidas durante el conflicto, y pide a la Fiscalía General que elabore una lista de casos en un plazo de solo cinco meses.

También estipula que toda decisión judicial de este tipo se considerará *cosa juzgada* y, por lo tanto, no podrá ser apelada. Además, prohíbe las extradiciones pasivas con fines de enjuiciamiento en tribunales extranjeros.

"Expreso mi profunda preocupación por este intento de abrir la puerta a una amnistía *de facto* y eliminar la aplicación de sanciones penales por violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad", dijo el Relator Especial de la ONU en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli. El experto recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe recurrir a

figuras como la amnistía o medidas que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria para los casos de graves violaciones de los derechos humanos *.

"Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros", dijo Salvioli. Además, dijo, la impunidad en relación con esos delitos puede contribuir a su repetición y a la creación de círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país.

Salvioli compartió sus preocupaciones con las autoridades pertinentes, incluida la Asamblea Legislativa, durante una visita oficial a El Salvador del 24 de abril al 3 de mayo. En marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó **preocupaciones similares**.

"Me alarma que las partes en el conflicto armado -que corren el riesgo de ser enjuiciadas por violaciones cometidas en ese período- traten de establecer un pacto de impunidad antes de que se produzca un cambio de gobierno el 1º de junio de 2019, que será la primera administración desde los Acuerdos de Paz que no ha sido parte en el conflicto. Este intento es tan espurio como ilegal bajo la ley nacional e internacional", dijo.

"He visto compromiso y buenas intenciones en la actual administración para avanzar en el proceso de justicia transicional en los ámbitos de la verdad, las reparaciones y las garantías de no recurrencia. Espero que este compromiso sea igualmente firme a la hora de sentar las bases para garantizar la justicia a las víctimas.

"Quisiera recordar que los procesos de justicia transicional no son un ejercicio de 'escoger y elegir', sino que deben ser implementados de manera integral, abordando cada uno de los elementos constitutivos de una agenda de justicia transicional: verdad, justicia, reparaciones y garantías de no recurrencia.

"No hay razones claras por las que los mecanismos de impunidad como los propuestos en el borrador puedan considerarse legítimos, o incluso necesarios en términos políticos. Tampoco son legales. La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos".

FIN

* Ver Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C N° 132, párr. 97; y Caso Barrios Altos Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2012, párr. 55

El Sr. Fabian Salvioli (Argentina) fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018 como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es abogado y profesor de derechos humanos. Fabián Salvioli es profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Ha dado conferencias en muchos países y universidades de América, Europa, África y Asia. El Sr. Salvioli es autor de varios libros y artículos sobre derecho internacional de los derechos humanos. Fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 2009 y 2016, y su Presidente entre 2015 y 2016.

Como Relator Especial, el Sr. Salvioli forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general que se da a los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones nacionales específicas o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

UN Human Rights, Country Page: El Salvador

Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con nosotros: Sra. Brenda Vukovic (+41 22 917 9635 / bvukovic@ohchr.org)

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU póngase en contacto con: Sr. Jeremy Laurence (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

El Salvador: Legislative Assembly must not pass “de facto amnesty” bill for rights violations, say UN experts

GENEVA (16 May 2019) – The UN human rights expert on transitional justice urges the Legislative Assembly of El Salvador not to pass a bill allowing *de facto* pardons for serious human rights violations and war crimes committed during the internal armed conflict that claimed 75,000 lives between 1980 and 1992.

The Political Commission of the Legislative Assembly has been considering draft articles for a proposed National Reconciliation Law since 14 May 2019. Victims of the armed conflict, their representatives, and wider civil society have not been consulted in the process. A bill based on these draft articles could be approved in the plenary of the Assembly before the end of this week.

The draft articles seek to implement a 2016 Supreme Court judgement that declared the unconstitutionality of the Amnesty Law established in 1993, and requested the Legislative Assembly issue a new National Reconciliation Law.

Provisions of this draft include *de facto* amnesties or pardons, as prison sentences will be suspended and substituted with community service, and criminal responsibility will be attributed only for the direct omission or action in the realisation of a punishable act, risking impunity for those who ordered, participated or abetted. It also sets a status of

limitation of five years for the investigation and prosecution of the violations committed during the conflict, and requests the General Prosecutor's Office to draw a list of cases within five months.

It also stipulates that any such judicial decision will be considered *res judicata* and can, therefore, not be appealed. In addition, it forbids passive extraditions for the purpose of prosecution in foreign courts.

"I express serious concern at this attempt to open the door for a *de facto* amnesty and eliminate the enforcement of criminal sanctions for severe human rights and humanitarian law violations and crimes against humanity," said the UN expert on the promotion of truth, justice, reparations and guarantees of non-recurrence, Fabian Salvioli. He recalled the jurisprudence from the Inter-American Court of Human Rights that prohibits amnesty mechanisms or measures that seek to impede or suppress the effects of a conviction ruling in cases of severe human rights violations*.

"Amnesties, statutes of limitations and mechanisms that remove the effect of criminal sanctions are incompatible with crimes that represent serious violations of human rights, such as torture, summary executions, forced disappearances and genocide, among others," Salvioli said. In addition, he said, impunity in relation to such crimes can contribute to their repetition and to the creation of vicious cycles of violence, as is currently the case in the country.

Salvioli shared his concerns with relevant authorities, including the Legislative Assembly, during an **official visit** to El Salvador from 24 April to 3 May. In March, the UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet expressed **similar concerns**.

"I am alarmed that the parties to the armed conflict - who risk criminal prosecution for violations committed in that period - are attempting to establish an impunity pact before a change of Government on 1 June 2019 will see the first administration since the Peace Accords that has not been party to the conflict. This attempt is as spurious as it is illegal under national and international law," Salvioli said.

"I have seen commitment and good intentions in the current administration to advance the transitional justice process in areas of truth, reparations and guarantees of non-recurrence. I hope that this commitment stands equally strong when setting up the basis to guarantee justice for the victims.

"I would like to recall that transitional justice processes are not a 'pick and choose' exercise, they must be implemented comprehensively, addressing each constitutive element of a transitional justice agenda: truth, justice, reparations and guarantees of non-recurrence.

"There are no clear reasons why impunity mechanisms such as those proposed in the draft could be considered legitimate, or even necessary in political terms. Neither are they legal. The conviction and effective punishment of those responsible is an obligation

of the Salvadoran State, and it cannot be skirted through legislative decisions that run contrary to international human rights law.”

ENDS

*See Corte IDH. Case of Gutiérrez Soler v. Colombia. Ruling from September 12, 2005. Series C N° 132, paragraph 97; and Case of Barrios Altos v. Peru. Supervision of Ruling Compliance. Inter-American Human Rights Court Resolution from September 7, 2012, paragraph 55

Mr. Fabian Salvioli (Argentina) was appointed by the UN Human Rights Council in 2018 as the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence. He is a human rights lawyer and professor. Fabián Salvioli is professor of International Law and Human Rights at the School of Law of the University of La Plata. He has lectured in many countries and universities across the Americas, Europe, Africa and Asia. Mr. Salvioli has authored several books and articles on international human rights law. He was member of the United Nations Human Rights Committee between 2009 and 2016, and its President between 2015 and 2016. As a Special Rapporteur, Mr. Salvioli is part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council's independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

UN Human Rights, Country Page: El Salvador

For more information and **media requests**, please contact: Ms Brenda Vukovic (+41 22 917 9635 / bvukovic@ohchr.org).

For **media inquiries** related to other UN independent experts, please contact:
Mr. Jeremy Laurence, UN Human Rights – Media Unit (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

Follow news related to the UN's independent human rights experts on Twitter [@UN_SPExperts](https://twitter.com/UN_SPExperts)

Concerned about the world we live in? Then **STAND UP for someone's rights today**. #Standup4humanrights and visit the web page at <http://www.standup4humanrights.org>